



Carentes de los medios de investigación social que permitieran medir con mayor o menor exactitud y mayores o menores sesgamientos las reacciones públicas, es difícil declarar cuál es el estado de la opinión nacional respecto de su gobierno cuando se cumple un año de la actual administración. Todavía no están funcionando, por lo demás, los mecanismos de expresión política que permitieran una manifestación suficiente y orgánica de los ciudadanos en torno del balance que obligadamente debemos formular hoy,

precisamente, en que se cumplen los primeros 365 días del régimen de López Portillo.

Con todo, es posible examinar, con las limitaciones de todo género que provienen de una posición meramente individual, lo que ha ocurrido en este primer año. La primera calificación que ocurre dar a este término anual corresponde a la acción vacilante del gobierno, que en ese breve lapso apenas ha podido, en el mejor de los casos, sentar las bases para su labor de los próximos años.

El actual gobierno se enfrentaba a dos clases de problemas, cuando el año pasado inauguró sus tareas. En primer lugar, tenía que reparar la dañada economía nacional, que a sus males estructurales había agregado severos deterioros coyunturales. En el campo de la política, debía cumplirse también una faena de restauración: la credibilidad de los funcionarios, nunca muy profunda en un régimen inclinado a la retórica, al verbalismo y a la demagogia, había casi desaparecido en los últimos meses del sexenio anterior. Se trataba de un fenómeno tan generalizado que no sólo abarcaba a una clase media que suele ser irresponsablemente malediciente, sino también a otros sectores, incluida la propia clase política.

De tal situación se desprendieron los dos vertientes en que ha corrido la acción gubernamental desde diciembre pasado. En el plano de la política, se ha realizado una labor de pinzas. Uno de sus brazos está dirigido a los sectores empresariales. Respecto de ellos, el

ritornelo empleado ha sido la recuperación de la confianza. Aunque no faltan exabruptos esporádicos, circunstanciales, en sentido contrario el tono para calificar la tarea social de los dirigentes de la economía privada es armonioso y cordial. No sólo se admite el papel que desempeñan en una economía de mercado, como la nuestra, sino que en ocasiones se les eleva hasta los niveles del heroísmo. Por su parte, los líderes patronales, aun con alguna reticencia, han correspondido, también verbalmente, a la confianza que se les pide y que han vuelto a otorgar, en un acto casi de generosidad.

Esta misma necesidad de crear confianza ha conducido a una política de endurecimiento respecto del movimiento obrero independiente y democrático. No podemos decir, por supuesto, que se haya generalizado un clima de represión hacia las reivindicaciones gremiales, ni que haya cesado la aplicación de las normas tutelares de los trabajadores. Lo que sí ocurre, con toda evidencia, es que dentro de los márgenes de discrecionalidad que la ley y la práctica social conceden a las autoridades del Trabajo —y las políticas en relación con asuntos laborales— se está hoy en el mínimo posible.

Asimismo dentro de este propósito general de provocación de la confianza empresarial, al propio tiempo que para el logro de otros objetivos, el gobierno emprendió una reforma administrativa que comenzó por una redistribución de funciones. Era previsible que la adecuación de tareas las entorpeciera en una primera etapa. Quizá conjeturalmente sean esperables mejores resultados en un plazo mayor que el transcurrido. Pero, al concluir el primer año de este gobierno, la reforma administrativa ha generado mayores conflictos, ineficiencias y dispendios que los suscitados por la situación que buscó modificar.

El otro brazo de la tijera que hemos imaginado como instrumento de las acciones políticas fue la reforma constitucional destinada a dar mayor participación a las minorías. Su solo planteamiento constituyó un adelanto. La consulta nacional a ese respecto permitió la expresión, por medio de los canales más diversos, de puntos de vista que hasta hace poco tiempo estaban más o menos en la clandestinidad. En su concepción general, además, la reforma política favorecerá la evolución democrática. Sólo permitirá eso, claro, pero tal y no otro es su propósito. Acaso el principal reparo que se le puede oponer es su insuficiencia, no en el sentido de que se pretenda una rendición del sistema frente a sus impugnadores, sino

Dic - 7 - 1977

Doce meses de vacilante

De Diciembre

UN BRAZO AL SECTOR EMPRESARIAL



En el enfrentamiento al problema económico ha sufrido sus mayores dificultades el gobierno que hoy cumple un año. Las acciones gubernamentales han tenido resultados, ni duda cabe. Pero estos resultados deben medirse en un doble plano, el de los indicadores económicos y el de la reacción popular. Así lo hizo el secretario de Comercio durante su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados: la inflación va cediendo, pero es preciso hacerlo sentir con hechos a una economía popular y una opinión pública "afectadas por la crisis durante un periodo que puede parecer corto a los técnicos, pero que resulta dramáticamente largo para la economía de las familias..."